



INFORMACIONES

Herausgeber/Editor:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de Juristas

www.dsjv-ahaj.com

Editorial	3
Prof. Dr. Juan Pablo Correa Delcasso La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia	5
Frank Behrenz Keine vGA wegen bloß tatsächlicher Nutzungsmöglichkeit einer spanischen Immobilie	8
Dr. Karl Felix Oppermann La aplicación del derecho español ante los tribunales alemanes - Nuevas Directrices del Instituto Max Planck	14
Frank Behrenz Wassermeyer, Doppelbesteuerung: DBA	17
Alba Ródenas Borràs Los MASC como requisito de procedibilidad exigido por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia: Dudas ante los conflictos transfronterizos	18
Alba Ródenas Borràs ADR & grenzüberschreitende Streitigkeiten: Das spanische Gesetz LO 1/2025 (Ley de de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia)	20
Frank Müller Steuerrecht 2025 (Teil 1)	22
Fernando Pérez Lozada Financiación de litigios en Europa: oportunidades y desafíos en el contexto hispano-alemán	35
Fernando Pérez Lozada Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten in Europa: Chancen und Herausforderungen im spanisch-deutschen Kontext	37
Jörg Steinheimer „Español jurídico - Illustrierte spanische Rechtsterminologie“	39
Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación	40
Veranstaltungen / Eventos	41
Mercado de trabajo / Praktikantenstellen	42
Willkommen / Bienvenidos	47
Impressum / Pie de imprenta	49

Alba Ródenas Borràs

Los MASC como requisito de procedibilidad exigido por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia: Dudas ante los conflictos transfronterizos

La LO 1/2025, por medio de su artículo 5, introduce un requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, consistente en la necesidad de acudir a algún medio adecuado de solución de controversias para que sea admitida una demanda.

Se entienden como MASC los siguientes: negociación directa, mediación, conciliación privada, notarial o registral, oferta vinculante confidencial, opinión de tercero experto independiente y proceso de derecho colaborativo. En ese sentido, la iniciativa de acudir a los MASC puede proceder de una de las partes, de ambas de común acuerdo, de una decisión judicial o del LAJ.

De conformidad con el artículo 10 de la LO 1/2025, la actividad negociadora previa debe ser acreditada y, en ese sentido, pueden darse situaciones distintas descritas en la propia norma.

Si bien la parte procedimental y procesal nacional, aunque no ajena de dudas en su práctica, es algo más clara, no lo es sin embargo la parte correspondiente a los conflictos transfronterizos.

1. Conflictos transfronterizos

El artículo 3 de la LO 1/2025, en su primer apartado, delimita la aplicación de la obligatoriedad de acudir a los MASC en el ámbito material civil y mercantil, e incluye los conflictos transfronterizos.

A continuación, el precepto remite a la Ley 5/2012 para la definición de dichos conflictos, en concreto a su artículo tercero, según el cual un **conflicto transfronterizo es aquél en que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto al que se encuentran las otras partes, cuando acuerden o sea obligatorio hacer uso de la mediación.**

Además, el mismo precepto añade que también se consideraran conflictos transfronterizos los que se resuelven por mediación cuando el acuerdo o consecuencia de la mediación se pretenda ejecutar en un Estado distinto.

Señala también la LO 1/2025, **cuando una de las partes tenga domicilio en España y la actividad negociadora se realice en territorio español, será de aplicación la obligatoriedad de acudir a los MASC, salvo las excepciones señaladas en la propia norma.**

Este precepto no parece presentar un problema en los litigios que se sometan ante un Tribunal en territorio español. No obstante, de una primera lectura del artículo 3 señalado, puede parecer la obligatoriedad de los MASC un requisito de procesabilidad igualmente aplicable en litigios transfronterizos donde una de las partes tenga su domicilio en España y se negocie en España, pese a que el foro judicial competente sea el Tribunal de un tercer país

El principio de soberanía tiene su límite dentro del Estado español y se basa en el **principio lex fori regit processum**. Las normas procesales tienen como destinatario los tribunales, siendo éstos a quienes les vincula lo que determine su propio legislador. Por ello, el principio de *lex fori* es absoluto y está estrechamente relacionado con

el principio de territorialidad. Esta regla se encuentra recogida en el artículo 3 de la LEC: **“Con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se registrarán únicamente por las normas procesales españolas”**. De esta lectura podemos extraer que no corresponde a una excepción lo que se prevea en una Ley como la LO 1/2025.

Constituye norma general en los Convenios internacionales que regulan asistencia judicial internacional que se aplique ley procesal del Estado donde se realiza el acto procesal, siendo por ello necesario que para establecer otra cosa sea regulado en un Convenio y no mediante ley interna.

Entendemos, que, si el foro competente es por ejemplo un Tribunal de Alemania, se aplicará la norma procesal alemana, siendo ésta la que imponga como requisito previo para presentar una demanda judicial la mediación o negociación previa y la forma de acreditarla. No, en cambio, la norma procesal española.

- El principio de *lex fori* es absoluto.
- Las normas procesales tienen como destinatario los tribunales, a éstos sólo les vincula lo que dicta su propio legislador.

Además, se plantea la cuestión de si los requisitos de residencia y actividad negociadora en España son ambos obligatorios.

Por otro lado, el **artículo 5.3 de la LO señala de forma explícita cuándo NO será necesario acudir a un medio adecuado de solución de controversias en el ámbito internacional**. Entre las demandas o solicitudes judiciales, se menciona la **petición de requerimiento europeo de pago conforme al Reglamento (CE) n.º 1896/2006** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, o **solicitar el inicio de un proceso europeo de escasa cuantía**, conforme al Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía.

2. Ejecución de sentencias extranjeras en España

Por un lado, en lo que se refiere a la **formalización del acuerdo**, y en el supuesto de que haya de ejecutarse en otro Estado, además de la elevación a escritura pública será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea. (*artículo 12 LO 1/2025*)

En segundo lugar, y siguiendo con el tenor literal del **artículo 5.3 de la LO 1/2025**, **“No será preciso acudir a un medio adecuado de solución de controversias para la interposición de una demanda ejecutiva, (...)”**.

Si bien queda claro que, para la interposición de una demanda ejecutiva, no es necesario acudir a un MASC, se plantea una segunda cuestión en

cuanto al requisito previo de acudir a los MASC en la reclamación inicial ante un tercer Estado más la posible oposición ante una ejecución en España de un título ejecutivo extranjero.

Pongamos como ejemplo, que una de las partes tiene domicilio en España, la competencia judicial es en Alemania y ante los Tribunales competentes de dicho país se ha presentado una demanda, de acuerdo con el Reglamento Bruselas Ibis 1215/2013. La norma procesal aplicable al procedimiento y requisitos de admisibilidad será la ley procesal alemana por el principio de territorialidad.

Sin embargo, como hemos expuesto anteriormente, la norma parece velar por la utilización de los MASC en asuntos transfronterizos si una de las partes tiene su domicilio en España y la actividad negociadora se ha llevado a cabo en España (*entendiendo que estos dos requisitos han de ser conjuntos...*).

Pues bien, una vez solicitada el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera en España, ¿es posible una oposición por parte del ejecutado alegando la falta de actividad negociadora previa de acuerdo con la LO 1/2025?

No existiendo esta causa de oposición en los instrumentos internacionales ni de momento en nuestro ordenamiento interno, ¿podría el ejecutado alegar que el reconocimiento es contrario al orden público del Estado miembro requerido, es decir, del Estado Español? (*artículos 44 y 46 RBibis*).

Es muy posible que la respuesta al alcance del requisito de admisibilidad de los MASC en conflictos transfronterizos la acabe dirimiendo el TJUE, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, delimitando la función jurisdiccional territorial e internacional.



Alba Ródenas Borràs

Abogada LLM
Prof. de Derecho Internacional Privado UB
Augusta Abogados, Barcelona
a.rodernas@augustaabogados.com

Alba Ródenas Borràs

ADR & grenzüberschreitende Streitigkeiten: Das spanische Gesetz LO 1/2025 (Ley de de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia)

Das kürzlich verabschiedete spanische Gesetz LO 1/2025 führt im zivil- und handelsrechtlichen Verfahrensrecht eine neue Zulässigkeitsvoraussetzung ein. Künftig ist die Erhebung einer Klage davon abhängig, dass zuvor eine geeignete Methode der Streitbeilegung in Anspruch genommen wurde (ADR).

Als anerkannte alternative Streitbeilegungsmethoden gelten: direkte Verhandlungen, Mediation, private, notarielle oder registerrechtliche Schlichtung, ein vertrauliches verbindliches Angebot, die Stellungnahme eines unabhängigen Sachverständigen sowie das kollaborative Verfahren.

Artikel 3 legt den Anwendungsbereich der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von ADR im zivil- und handelsrechtlichen Bereich fest und erstreckt diese auch auf grenzüberschreitende Streitigkeiten.

Die praktische Umsetzung dieser Regelung wirft jedoch eine Reihe von Fragen auf, die sich erst im Laufe ihrer Anwendung klären werden – insbesondere im internationalen Kontext.

Nach der gesetzlichen Definition liegt eine grenzüberschreitende Streitigkeit vor, wenn mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat hat als die übrigen Beteiligten und eine Mediation vereinbart oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Darüber hinaus bestimmt die Vorschrift, dass auch solche Streitigkeiten als grenzüberschreitend gelten, die durch Mediation beigelegt werden, sofern das daraus resultierende Einigungsabkommen in einem anderen Staat vollstreckt werden soll.

Es ist hervorzuheben, dass die Verpflichtung zur Nutzung alternativer Streitbeilegungsmethoden auch dann gilt, wenn eine der Parteien ihren Wohnsitz in Spanien hat und die Verhandlungen in Spanien geführt werden – es sei denn, die Norm selbst sieht Ausnahmen vor.

Diese Vorschrift stellt bei Streitigkeiten, die vor einem spanischen Gericht anhängig gemacht werden, kein Problem dar.

Fraglich ist jedoch, ob sie auch als allgemeine Prozessvoraussetzung in grenzüberschreitenden Streitigkeiten zu verstehen ist, wenn eine der Parteien ihren Wohnsitz in Spanien hat und die Verhandlungen in Spanien geführt wurden – selbst wenn das zuständige Gericht in einem Drittstaat liegt.

Sollte dies der Fall sein, würde eine spanische Verfahrensnorm auf ein Verfahren in einem Drittstaat Anwendung finden, was möglicherweise gegen europäische und völkerrechtliche Vorgaben verstoßen könnte.

Das Souveränitätsprinzip findet seine Grenze innerhalb des spanischen Staatsgebiets und basiert auf dem Grundsatz *lex fori regit processum*. Dieser Grundsatz ist absolut und steht in engem Zusammenhang mit dem Territorialitätsprinzip.

Nach unserer Auffassung und im Einklang mit den Regeln des internationalen Privatrechts gilt: Liegt die Zuständigkeit bei einem deutschen Gericht, ist das deutsche Verfahrensrecht maßgeblich. Es obliegt dem deutschen Recht, festzulegen, ob und in welcher Form eine Mediation oder vorherige Verhandlung als Zulässigkeitsvoraussetzung erforderlich ist. Das spanische Verfahrensrecht wäre hingegen nicht anwendbar.

In jedem Fall empfehlen wir, die Klauseln zur Gerichtsstandsvereinbarung sowie zur alternativen Streitbeilegung zu überprüfen und an die Anforderungen der LO 1/2025 anzupassen.

Im Anschluss möchten wir nun besonders auf die **Vollstreckung von ausländischen Urteilen und Vereinbarungen in Spanien eingehen, um deren effektive Durchsetzung zu gewährleisten.**

Die spanische Gesetzgebung LO 1/2025 verlangt, dass im Falle einer außergerichtlichen Einigung in Spanien, die in einem anderen Staat vollstreckt werden soll, diese Vereinbarung öffentlich beurkundet wird.

Zudem müssen die Anforderungen erfüllt werden, die möglicherweise durch internationale Abkommen, an denen Spanien beteiligt ist, sowie durch europäische Vorschriften aufgestellt sind (Artikel 12).

Gleichzeitig besagt der Wortlaut von **Artikel 5.3 der LO 1/2025**, dass es „*nicht erforderlich ist, ein geeignetes Verfahren zur Streitbeilegung in Anspruch zu nehmen, um eine Vollstreckungsklage einzureichen (...)*“.

Während somit klar ist, dass für die Einreichung einer Vollstreckungsklage kein ADR-Verfahren notwendig ist, stellt sich eine zweite Frage: *Ist ein ADR-Verfahren erforderlich, wenn eine Klage vor einem Drittstaat eingereicht wird, und wie verhält sich dies im Hinblick auf mögliche Einsprüche gegen die Vollstreckung eines ausländischen Vollstreckungstitels in Spanien?*

Nehmen wir an, eine Partei hat ihren Wohnsitz in Spanien, die zuständige Gerichtsbarkeit liegt in Deutschland und eine Klage wurde vor dem zuständigen Gericht dieses Landes gemäß der Brüssel Ia-Verordnung eingereicht. In diesem Fall wird das deutsche Prozessrecht aufgrund des Territorialitätsprinzips auf das Verfahren angewendet, einschließlich der Zulässigkeitsvoraussetzungen.

Die Norm scheint darauf abzuzielen, ADR-Verfahren bei grenzüberschreitenden Angelegenheiten zu fördern, wenn eine der Parteien ihren Wohnsitz in Spanien hat und die Verhandlungen in Spanien geführt wurden (wobei diese beiden Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein müssen...).

Nun stellt sich die Frage: Wenn die Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Urteils in Spanien beantragt wird, kann der Vollstreckungsschuldner dann Einspruch erheben und das Fehlen einer vorherigen Verhandlung gemäß der LO 1/2025 geltend machen?

Da eine solche Einspruchsgrundlage weder in internationalen Instrumenten noch bislang in unserem nationalen Recht vorgesehen ist, könnte der Vollstreckungsschuldner behaupten, dass die Anerkennung des Urteils gegen die öffentliche Ordnung des angeforderten Mitgliedstaates, also Spaniens, verstößt? (*Artikel 44 und 46 der Brüssel Ia-Verordnung*).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der EuGH letztlich die Zulässigkeit von ADR-Verfahren in grenzüberschreitenden Streitigkeiten klären wird, wie er dies bereits in vielen anderen Fällen getan hat, indem er die territoriale und internationale Zuständigkeit präzisiert.



Alba Ródenas Borràs

Abogada LLM
Dozentin an der UB
Augusta Abogados, Barcelona
a.rodenas@augustaabogados.com

INF

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
Revista jurídica hispano-alemana



INFORMACIONES